

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202241210100044104

Fecha: 2022-12-06

TRD: 4121.010.5.1.188.004410

Rad. Padre: 202241310100032034

*Lorena Mejía 10.17 am*

NHORA YHANET MONDRAGÓN ORTIZ

Secretaria de Gobierno  
Alcaldía de Santiago de Cali  
Avenida 2n # 10-70 Piso 3

Asunto: Viabilidad jurídica del Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO".

Cordial saludo;

Con el fin de dar respuesta al oficio allegado a este Departamento Administrativo mediante radicado No. 202241310100032034, a través del cual se presenta para estudio jurídico el Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO", procederá este despacho a plantear su postura jurídica frente a la propuesta.

Así las cosas, se expondrán los antecedentes de la iniciativa, así como el objeto concreto, los fundamentos normativos que sustentan la propuesta acordal, para por último, discernir sobre la viabilidad jurídica de la misma.

La propuesta presentada tiene como objeto la condonación de la deuda tributaria a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca, relacionada con el predio donde actualmente funciona el Centro de Formación Valle de Lili, como un centro de atención especializado para prestar alguno de los servicios que relaciona delitos penales, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El predio se identifica con el número predial Z000302580000, ID0000004631 y sobre el inmueble referido se requiere la



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

condonación del impuesto predial por la suma de \$1.515.930.660.

Este valor comprende las vigencias fiscales 2014 a 2022, según entiende este organismo. Luego, se considera que en virtud de los principios que pregonan los artículos 9 (prevalencia de derechos) y 10 (corresponsabilidad) del Código de la Infancia y Adolescencia, es posible condonar el valor del impuesto territorial en mención para garantizar la función pública que asegura dicho predio, lo cual redundará en un mayor bienestar para los adolescentes

Por su parte, en relación con el inmueble identificado con el número predial F058500010000 ID 0000043133, el proyecto de acuerdo señala que en dicho predio funciona el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, quien funge como su propietario. Se trata de una Empresa Social del Estado (ESE) adscrita al Distrito. Tiene como misión institucional brindar atención y albergue para adultos mayores de edad en condiciones de vulnerabilidad. La condonación solicitada al concejo para este predio se concreta en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS \$2.347.849.545 correspondiente al impuesto predial que adeuda por las vigencias de los años 2016 al 2022 y la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS. \$755.863.529, correspondientes a la Contribución de Valorización y los intereses adeudados por El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, por el inmueble, identificado con el número F058500010000 ID 0000043133.

#### Amnistías tributarias:

La Corte Constitucional ha reiterado el concepto de amnistías tributarias como aquella modalidad extintiva del deber fiscal, en la que opera una condición sobre una obligación tributaria preexistente.<sup>1</sup>

Así, bajo el concepto expuesto, se tiene que estamos frente a una amnistía tributaria concretada en la condonación de deudas de carácter tributario a favor del Distrito de Santiago de Cali.

<sup>1</sup> Sentencia C-804 de 2001. Corte Constitucional.



SG GER356/37





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido en diferentes ocasiones sobre la constitucionalidad de las medidas de carácter administrativas/legislativas en las que se otorgan amnistías tributarias. En línea con lo anterior, referiremos algunas de ellas, así:

Sentencia C 511 de 1996:

(...)

*En suma, las amnistías o saneamientos como el que consagran las normas estudiadas, en principio son inconstitucionales. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas que contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse de casos excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde estricta congruencia con la causa y la finalidad que las anime, la carga de la justificación de que el régimen excepcional que se adopta es razonable y proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a los autores y defensores del mismo y, en consecuencia, se examinará por la Corte en cada oportunidad, mediante la aplicación de un escrutinio constitucional riguroso.*

(...)

Sentencia C- 743 de 2015:

*La Corte Constitucional a través de este fallo hace un recuento sobre las decisiones de esa corporación con relación a las amnistías tributarias y, además, establece los elementos a tener en cuenta para saber si una amnistía tributaria puede llegar a ser constitucional, así:*

*48. El carácter estricto del juicio aplicable en esta oportunidad encuentra fundamento en los problemas que las amnistías plantean a la luz de las normas constitucionales que gobiernan el sistema tributario. En efecto, si bien en la regulación de los diferentes tributos, el legislador goza de un muy amplio margen de configuración y apreciación que le permite no solo definir sus elementos sino también valorar la conveniencia de su adopción, cuando se dispone -tal y como ocurre en el presente caso- la aprobación de medidas especiales que exceptúan de la aplicación del régimen general a las personas que no han cumplido oportunamente sus obligaciones tributarias, se suscitan cuestiones constitucionales muy complejas desde la perspectiva de la igualdad y equidad del sistema tributario. Al mismo tiempo y en estrecha relación con ello, las medidas que constituyen una amnistía afectan no solo el igual deber de todos los ciudadanos -en virtud del numeral 9º del artículo 95- de contribuir al financiamiento de los*



SG-CER316627

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

*gastos e inversión del Estado, sino que también desafían la obligatoriedad de las leyes tributarias lo que afecta directamente la cláusula de Estado de Derecho.*

*En atención a ello y no obstante la amplia libertad de configuración del Congreso en esta materia, en los casos de amnistía se impone una carga justificativa especialmente exigente. Esa carga, a su vez, impone a este Tribunal la obligación de aplicar un juicio de proporcionalidad que, por las exigencias que plantea, reduce significativamente el margen de acción de las autoridades que participan en la creación del régimen tributario. En esa dirección, la constitucionalidad de las medidas mediante las cuales se instrumenta la amnistía, dependerá de que se encuentre (i) que persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa, (ii) que son efectivamente conducentes, (iii) que son necesarias y, finalmente, (iv) que son estrictamente proporcionadas[62].*

*48.1. La finalidad de una medida será imperiosa si resulta de tal trascendencia constitucional que su realización es inaplazable o urgente. No basta en estos casos que la finalidad no se encuentre prohibida por la Constitución o que sea posible atribuirle algún grado de importancia. No. En estos casos el objetivo buscado por el legislador debe revestir un grado extremo de trascendencia constitucional en tanto la medida incide, afectándolos seriamente, importantes requerimientos de la Constitución.*

*48.2. El examen de efectiva conducencia (idoneidad) exige que la medida empleada permita, con un alto grado de probabilidad según la evidencia empírica existente, alcanzar el objetivo invocado. No es suficiente, como cuando es del caso aplicar un juicio débil de proporcionalidad, que el medio empleado pueda servir para alcanzar el propósito. En el juicio estricto la superación del examen de idoneidad exige contar con argumentos empíricos poderosos que demuestren, casi al nivel de certeza, que la finalidad imperiosa invocada puede ser alcanzada con la aplicación del medio elegido.*

*48.3. El juicio de necesidad impone determinar si el medio empleado es imprescindible para alcanzar el propósito o si, por el contrario, existen medidas alternativas que no restrinjan, o lo hagan en menor medida, el principio constitucional afectado. Este examen, que plantea algunas de las más complejas tensiones en el ejercicio del control constitucional de medidas legislativas, impone a la autoridad demostrar que desde el punto de vista fáctico no existen instrumentos menos lesivos para el principio afectado que aquel que fue elegido. Ello impone (a) un deber de valorar todas las alternativas efectivamente conducentes a fin de establecer el grado de impacto que tienen en el principio afectado y, una vez adelantada tal valoración, (b) una obligación de identificar la medida que tenga menos injerencia en el principio.*

*48.4. Finalmente, en caso de superar las anteriores etapas del juicio, deberá establecerse si la medida es estrictamente proporcionada, esto es, deberá determinar la Corte Constitucional si la importancia de las razones que apoyan el empleo del medio puede justificar la intensidad de las restricciones sobre los principios afectados. Esta etapa del juicio de proporcionalidad, según ha tenido oportunidad de advertirlo este Tribunal exige comparar (a) el peso o valor abstracto de los principios que colisionan, (b) el grado*



SC-08F355/37

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

*específico de afectación que la aplicación o no de la medida que se juzga pueda tener en cada uno de los principios que se enfrentan y (c) el nivel de certeza de las premisas fácticas con apoyo en las cuales se determina el grado de afectación[63].*

*Un ejemplo de desproporción evidente de una medida es aquel evento en el cual, de un lado, el valor constitucional abstracto del principio restringido con el empleo de la medida adoptada por el Congreso es muy alto, su grado de afectación concreta es intenso y dicho grado de afectación está respaldado por un indiscutible apoyo fáctico y, de otro, el valor constitucional abstracto del principio que se invoca para justificar la medida tiene una reducida importancia constitucional, el no empleo de la medida comporta una afectación leve de dicho principio y, adicionalmente, existen altos niveles de incertidumbre acerca de dicha afectación. Si lo que ocurre es precisamente lo contrario, podrá afirmarse la proporcionalidad en sentido estricto de la medida legislativa.*

*48.5. Cuando desplegado el análisis, la Corte concluye que alguna de las etapas juicio no son superadas, debe proceder a declarar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas.*

*Frente a la medida imperiosa, sostuvo la Corte: "La primera etapa del juicio estricto de proporcionalidad exige establecer si las medidas adoptadas persiguen un fin constitucional imperioso. Esta exigencia, según se explicó, se supera cuando el objetivo perseguido resulta constitucionalmente inaplazable o urgente. No es suficiente invocar buenas razones para superar este examen dado que, debido al carácter problemático de las amnistías, deben invocarse razones tan importantes que puedan justificar, prima facie, la afectación de los principios de igualdad y equidad tributaria (arts. 13, 95 y 363), del igual deber de concurrir al financiamiento de las actividades del Estado (art. 95.9) y del Estado de Derecho que impone el respeto a la Ley (art. 1)"*

Sentencia C-060 de 2018.

*19. Al menos dos fuentes normativas de índole constitucional sustentan la prohibición de las amnistías tributarias. En primer lugar, el artículo 95-9 de la Constitución determina como deber de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, de manera que una previsión legal que suprima ese deber en una situación concreta se presume inconstitucional, salvo que cumpla con un juicio estricto para su validez excepcional.*

(...)

*20. La jurisprudencia constitucional[56] define las amnistías tributarias como modalidades extintivas del deber fiscal, en la cual opera una condición o remisión de una obligación tributaria preexistente. En ese sentido, se diferencian de las exenciones en que se aplican cuando luego de haberse configurado la obligación del sujeto pasivo y encontrándose pendiente del cumplimiento de la misma, se les condona el pago de sumas que debía asumir por concepto de la obligación, o de sus sanciones, intereses, etc. Esto*



SG CERQJ55677

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

*en razón del cumplimiento de determinados requisitos por parte del sujeto pasivo, que lo hacen acreedor del beneficio. Así, "mientras las exenciones operan de manera anticipada, evitando que se genere el gravamen, en el caso de la amnistía se está condonando una obligación tributaria que ya se ha causado."*[57]

(...)

20.1. Al margen de la denominación del beneficio tributario, se está ante una amnistía cuando, "ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad.". En ese sentido, se predica una amnistía tributaria cuando el beneficio opera con posterioridad a la exigibilidad de la obligación fiscal.

20.2. Como se expresó en precedencia, "las amnistías tributarias comprometen, prima facie, los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones."

20.3. Aunque en el corto plazo las amnistías concurren en el cumplimiento de fines constitucionalmente valiosos, en especial (i) el aumento del recaudo y la ampliación de la base tributaria; y (ii) el ahorro de recursos públicos utilizados en las labores de fiscalización y sanción; su uso recurrente genera un desincentivo para el pago oportuno de las obligaciones tributarias, ante la expectativa de una legislación futura que confiera beneficios a quienes han incurrido en mora. Así, desde la perspectiva del actor racional de mercado y ante la proliferación de normas fiscales con efectos de amnistía, la postura más acertada sería incurrir en mora, en abierta contradicción con el deber constitucional de tributar.

20.4. La validez constitucional de la amnistía, en ese orden de ideas, no puede estar fundamentada en el logro de mayores ingresos fiscales o en el aumento de la eficiencia y eficacia del recaudo, sino en una justificación que supere las condiciones de un juicio estricto de proporcionalidad. Por lo tanto, "[c]orresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la medida, para lo cual ha empleado el test de razonabilidad o principio de proporcionalidad.

(...)



SG-GER0556/37

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

*En contraste, la Corte ha declarado la constitucionalidad de normas que (i) confieren estímulos tributarios de índole coyuntural y con el fin de fomentar una actividad económica en situación de crisis; (ii) alivian la situación de los deudores morosos, sin que la medida legislativa les confiera un tratamiento fiscal más beneficioso que el aplicables a los contribuyentes cumplidos; y (iii) permiten la inclusión en la base gravable de activos omitidos o pasivos inexistentes, a condición que les imponga un régimen impositivo más gravoso del que habría correspondido si hubiesen sido declarados oportunamente y sin renunciar a la aplicación de sanciones.*

*21. En conclusión, las amnistías tributarias resultan prima facie inconstitucionales, en tanto son contrarias al deber constitucional de tributar y a los principios de equidad y justicia tributaria. No obstante, las mismas pueden ser excepcionalmente compatibles con la Carta Política, cuando superen un juicio estricto de proporcionalidad, en el que se demuestre que (i) la medida legislativa es imprescindible para cumplir con fines constitucionales imperiosos; o (ii) los efectos de la amnistía tributaria resulten neutros en relación con el tratamiento fiscal que reciben los contribuyentes cumplidos.*

La justificación constitucional para la condonación requerirá, entonces, el cumplimiento concurrente de los siguientes parámetros: i) que la medida es imprescindible para cumplir fines esenciales imperiosos; ii) se acredite la existencia de una situación excepcional; iii) la medida sea idónea; iv) la medida sea necesaria y v) la medida sea estrictamente proporcional.

Solicitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Una vez analizada la argumentación establecida en la propuesta acordal, se tiene que el beneficio tributario de la condonación cumple con los presupuestos que permiten demostrar que la medida es imprescindible, excepcional, idónea, necesaria y proporcional, por lo que podemos afirmar que en este caso, la medida es compatible con la Carta Política.

Es oportuno poner de presente que la medida tiene como finalidad garantizar mandatos que la Constitución ha impuesto en cabeza del Estado, así como derechos de especial trascendencia como los establecidos en el artículo 44 y 45 de la Constitución. Resulta absolutamente imprescindible velar por la protección de los derechos de la población adolescente atendida en el mencionado centro.



SG-06935627

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)

## Solicitud de E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.

Para el caso del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, se tiene igualmente que el beneficio tributario que se pretende otorgar a través de la propuesta, cumple con los presupuestos que permiten demostrar que la medida es imprescindible, excepcional, idónea, necesaria y proporcional, por lo que podemos afirmar que en este caso, la medida es compatible con la Carta Política.

A través de la medida se pretende garantizar deberes estatales y derechos de trascendencia constitucional, como el establecido en el artículo 46 de la Constitución Política. De igual forma, la exposición de motivos y la solicitud allegada por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, dan cuenta de la situación financiera del mismo y de la absoluta necesidad de la condonación para facilitar la aprobación del programa de saneamiento fiscal en el que pretende ingresar la E.S.E, para evitar con ello la intervención de la que podría ser objeto el ancianato y eso impacte negativamente en la prestación del servicio a las personas de la tercera edad.

El informe presupuestal y financiero a junio de 2022 presentado por la gerente encargado de Ese Hospital Geriátrico, evidencia falta de liquidez para los compromisos contractuales, requiriendo un plan financiero de choque que se centre en la generación de mayores ingresos y sostenimiento o disminución de los gastos y la medida que se pretende adoptar, entre otros, ayuda a la viabilidad del mencionado plan financiero y, en consecuencia, que se mejore la situación financiera de la E.S.E, lo que redundará en la continuidad en óptimas condiciones de la prestación de los servicios a la población adulta mayor.

## Competencia del Concejo Distrital de Santiago de Cali.

La Corporación Administrativa es competente para expedir el acuerdo que se propone, de conformidad con las siguientes disposiciones:





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

## Constitución Política de Colombia.

- *ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:*

*1. Gobernarse por autoridades propias.*

*2. Ejercer las competencias que les correspondan.*

*3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.*

*4. Participar en las rentas nacionales.*

- *ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:*

*(...)*

*4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.*

*(...)*

## Conclusión:

Una vez analizada la presupuesta desde su dimensión jurídica, este Departamento Administrativo concluye que es posible condonar las aludidas sumas para efectos de cumplir mandatos constitucionales. En ese sentido, la condonación sobre los tributos territoriales en mención redundará en un mayor bienestar para los adolescentes y adultos mayores.

Adicionalmente, la iniciativa cumple con los criterios relacionados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de amnistías tributarias, en especial, la sentencia C-060 de 2018.



SG CERESG017

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

Finalmente, es preciso indicar que en cumplimiento del artículo 7° de la ley 819 de 2003, la iniciativa cuenta con el análisis de impacto fiscal por parte del Departamento Administrativo de Hacienda en el que consta que la misma no afecta el marco fiscal de mediano plazo. Así, después de haber sido revisada la propuesta acordal, se tiene que la misma se encuentra ajustada a derecho y por tal motivo se otorga viabilidad jurídica para su presentación ante el Honorable Concejo.

Agradezco su atención;

MARIA DEL PILAR CANO STERLING

Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.



SG-GER055/97

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 9  
Teléfono: 6617084-85 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



MARIA DEL PILAR CANO STERLING  
Directora  
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica

ASUNTO: Alcance radicado No. 202241310200040824, Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO"

Cordial Saludo,

Conforme al asunto de la referencia me permito dar alcance a la viabilidad emitida según radicado No. 202241310200040824 de fecha noviembre 11 de 2022, la cual tuvo una modificación en su articulado haciéndose necesario realizar nuevamente una evaluación de la iniciativa frente a las finanzas territoriales, en lo concerniente al ARTICULO PRIMERO, donde se excluye de la condonación la Sobretasa Ambiental y sus Intereses, a los siguientes predios:

1. El Departamento del Valle del Cauca cuenta con un predio de su propiedad, ubicado en el corregimiento El Hormiguero VDA Valle del Lili circunscripción del Distrito de Santiago de Cali, el cual cumple con los parámetros establecidos por el ICBF en los lineamientos técnicos, para los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y que se les haya impuesto como sanción la privación de libertad en centro de atención especializado.

El inmueble mencionado tiene una acreencia del Impuesto Predial y Sobretasa Bomberil con sus correspondientes intereses, por valor de \$1.454.034.199, correspondiente a las vigencias 2014 al 2022.

CENTRO DE FORMACION VALLE DEL LILI		
NUMERO DE PREDIO	ID	IMPUESTO PREDIAL 2014 - 2022*
Z000302580000	000004631	1.454.034.199

Notas: - Valor correspondiente liquidación a diciembre 30 de 2022

- No incluye Sobretasa C.V.C. ni Intereses por mora C.V.C.

- Mediante Resolución No. 4131.032.9.25.04 del 10 de marzo de 2022 se depuran los años 2001 - 2013 por \$418.453.299.



SC-CER355037

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6to  
Teléfono: 6617227 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)

3

2. El inmueble ubicado en la carrera 70 # 2ª-04, circunscripción del Distrito de Santiago de Cali, que se identifica con el número predial F058500010000, ID 0000043133, en donde hace más de un (1) siglo se trabaja con adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando servicios de albergue y atención para este segmento de la población.

La condonación que realizará el Distrito se concreta en la suma de \$3.123.229.460, correspondiente al impuesto predial y Sobretasa Bomberil que adeuda las vigencias de los años 2016 al 2022 por valor de \$2.326.531.007 y lo correspondiente a la Contribución de Valorización, la financiación y los intereses de mora, por valor de \$796.698.453.

HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL			
NUMERO DE PREDIO	ID	IMPUESTO PREDIAL 2016 - 2022*	CONTRIBUCION POR VALORIZACION 2016 - 2022*
F058500010000	0000043133	2.326.531.007	796.698.453
TOTAL		3.123.229.460	

Notas: - Valor correspondiente liquidación a diciembre 30 de 2022

- No incluye Sobretasa C.V.C. ni Intereses por mora C.V.C.

El presente proyecto de Acuerdo no afecta la estabilidad financiera distrital, dado que no representa gastos adicionales y es consistente con las proyecciones de ingresos del Plan Financiero establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual no tiene contemplado estos recursos dentro de la prospectiva y estimaciones del Impuesto predial.

Atentamente,

  
PAULA ANDREA LOANZA GIRALDO  
Subdirectora Departamento Administrativo  
Subdirección de Finanzas Públicas

Copia: Nohora Yhanet Mondragón Ortiz – Secretaría de Gobierno

Proyecto: Liliana Patricia Escobar Morales – Auxiliar Administrativo  
Revisó: Genes Larry Velasco Velasco - Profesional Especializado



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 6to  
Teléfono: 6617227 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO  
Director  
Departamento Administrativo de Hacienda  
CAM, torre Alcaldía piso 6

Asunto: Concepto coherencia Plan de Desarrollo con Proyecto de Acuerdo condonación deudas tributarias predios donde funcionan Centro de Formación Valle del Lili y Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel

Cordial Saludo.

En atención al oficio 202241310100032044 recibido en este organismo el 3 de noviembre de 2022, donde se adjunta el Proyecto de Acuerdo *"Por el cual se condonan deudas tributarias a un predio de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca y un predio del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Empresa Social del Estado"*, el cual se radica nuevamente por haberse presentado cambio de nombre de la iniciativa a solicitud del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, *se indica lo siguiente:*

De manera detallada a continuación se presenta según reza en el Proyecto de Acuerdo el aporte que realizará el Distrito de Santiago de Cali:

- ✓ Para el predio de la Gobernación donde funciona el Centro de Formación Valle del Lili, con el fin de lograr la garantía de los derechos de los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y se les haya impuesto como sanción la privación de libertad en el centro de atención especializado, *"se requiere contar con un beneficio tributario para el predio de propiedad del Departamento del Valle del Cauca, por la suma que adeuda La Gobernación del Valle del Cauca por las vigencias 2014 al 2022, por el impuesto predial y complementarios, correspondientes al predio, identificado con el número Z000302580000 ID0000004631, donde funciona el Centro de formación Valle del Lili.*



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10  
Teléfono: 668 91 04 FAX 889 56 30 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

- ✓ El beneficio tributario solicitado al concejo se concreta en la condonación en la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$1.589.726.040) correspondiente al impuesto predial por las vigencias 2014 al 2022, sobretasa ambiental y sobretasa bomberil, con sus correspondientes intereses, por el inmueble, identificado con el número Z000302580000, ID0000004631. *Igualmente le permitirá que a partir del año 2023 se pueda acoger a las exoneraciones que apruebe el honorable concejo Municipal en materia de impuesto predial*”.
- ✓ Para el predio del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.SE, para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y protección e integración a la vida activa y comunitaria. *“El aporte que realizará el Distrito se concreta en la suma que adeuda por concepto de impuesto predial del predio, identificado con el número F058500010000 ID 0000043133 donde funciona el Hospital Geriátrico Ancianato san MIGUEL ESE, correspondiente a las vigencias de los años 2016 al 2022, valor que será condonado.*

*El beneficio tributario solicitado al concejo se concreta en la condonación de la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$2.490.579.732) correspondiente al impuesto predial que adeuda por las vigencias de los años 2016 al 2022 y la suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. (\$779.612.432), correspondientes a la Contribución de Valorización y los intereses generados por el inmueble, identificado con el número F058500010000 ID 0000043133, valores que serán condonados”.*

Esta iniciativa no responde a una meta del Plan de Desarrollo, dado que se constituye en una actuación administrativa de trámite, la cual se espera que posibilite que las instituciones mencionadas, puedan seguir prestando sus servicios a la población adolescente y adulta mayor de Santiago de Cali, quienes son beneficiarios directos de la gestión que adelantan las mismas.

No obstante lo anterior, por su carácter puede contribuir con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, así:



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10  
Teléfono: 668 91 04 FAX 889 56 30 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE PLANEACIÓN

Dimensión 2	Cali, Solidaria por la Vida
Línea Estratégica 202	Personas mayores en modalidad Centros Vida atendidas
Programa 202004	Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar
Indicador de Producto 52020040002	Personas mayores atendidas en modalidad hogar larga estancia y hogar de paso
Indicador de Producto 52020040003	Personas mayores en modalidad Centros Vida atendidas
Línea Estratégica 201	Distrito Reconciliado
Programa 201004	Programa: Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios
Indicador de Producto 52010040002	Población de adultos y adolescentes que incurrir en responsabilidad penal, intervenidos con acompañamiento psicosocial y/o procesos de justicia restaurativa

Se espera de este modo haber dado concepto frente al Proyecto de Acuerdo “*Por el cual se condonan deudas tributarias a un predio de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca y un predio del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Empresa Social del Estado*”, el cual no responde a una meta del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali, unida por la Vida, pero desde la gestión que se adelanta con esta iniciativa contribuye a su cumplimiento

Atentamente,

RICARDO JOSÉ CASTRO DAGORRI  
Director  
Departamento Administrativo de Planeación

Copia a: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública  
Departamento Administrativo de Gobierno

Proyectó: Danelly Zapata Saa, Profesional Universitario  
Revisó: Víctor Andrés Sandoval Ávila, Subdirector de Desarrollo Integral



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 10  
Teléfono: 668 91 04 FAX 889 56 30 [www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

DE 2022

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en los artículos 287 y 313 de la Constitución Política y la Ley 1551 de 2012.

#### **ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – Condonar los valores adeudados de las vigencias 2014 a 2022, por concepto de impuesto predial y sobretasa bomberil con sus correspondientes intereses, al inmueble identificado con el N° Predial Z000302580000 ID 0000004631, de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca, donde funciona el Centro de Formación Valle del Lili, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar familiar.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Condonar los valores adeudados de las vigencias 2016 a 2022, por concepto de impuesto predial y sobretasa bomberil, con sus correspondientes intereses, al predio identificado, con el N° Predial F058500010000 ID 0000043133 de propiedad de la ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL.

**ARTICULO TERCERO.** - Condonar los valores adeudados de las vigencias 2016 a 2022 por concepto de la Contribución de Valorización y sus correspondientes intereses al predio identificado, con el N° Predial F058500010000 ID 0000043133 de propiedad de la ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL.

**ARTÍCULO CUARTO:** De las condonaciones a que se refieren los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo queda excluido cualquier valor por concepto de Sobretasa Ambiental.

**ARTICULO QUINTO.** - El Departamento Administrativo de Hacienda a través de la Subdirección de Impuestos y Rentas y la Subsecretaria de Apoyo Técnico de la Secretaria de Infraestructura, deberán expedir los actos administrativos mediante los cuales se ajusten las cuentas corrientes de los predios identificados con el N° Predial Z000302580000 ID 0000004631 de propiedad del Departamento del Valle del Cauca y F058500010000 ID 0000043133 de propiedad de la ESE HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, aplicando la condonación de las deudas conforme lo establecido en los artículos anteriores.





PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2022

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

**ARTÍCULO SEXTO.** - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial de Santiago de Cali.


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a ( ) días del mes de de 2022

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ   
Alcalde Distrital de Santiago de Cali

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

HONORABLES CONCEJALES  
Concejo de Santiago de Cali

Cordial saludo,

De manera atenta presento a consideración del Honorable Concejo, el Proyecto de Acuerdo *“Por el cual se condonan deudas tributarias a un predio de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca y otro predio, propiedad del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Empresa Social del Estado”*, previa la siguiente:

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme con el artículo 1° de la Carta Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En armonía con ello, el Constitucionalista primario exaltó como fines del Estado, entre otros, el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, resaltando en su inciso segundo que *“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”*.

Lo anterior hace referencia inequívoca a la obligatoriedad que recae sobre el Estado como principal garante y protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El presente proyecto de acuerdo está dirigido a lograr por parte el Cabildo Distrital, la condonación de las deudas tributarias a dos predios, uno de propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca, donde funciona el Centro de Formación Valle de Lili, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otro inmueble del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Empresa Social del Estado, con el fin de apoyar a esas instituciones en el logro de sus objetivos, como se explicará más adelante.

El análisis individualizado de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada uno de los inmuebles que serán objeto de la condonación es el siguiente:

#### 1. RESPECTO AL CENTRO DE FORMACION VALLE DEL LILI A CARGO DEL ICBF

##### 1.1. ANTECEDENTES



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Que el artículo 44 de la Constitución Política establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Que el artículo 45 de la Constitución Política señala que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Que en desarrollo de las disposiciones constitucionales referidas, el Congreso de la República expidió la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, con el objeto de constituir un conjunto de normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

El artículo 139 de la Ley 1098 de 2006 creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer la conducta punible.

El numeral 4 del artículo 202 de la Ley 1098 de 2006 dispone como uno de los objetivos de las políticas públicas para la infancia y la adolescencia fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial.

El artículo 215 de la ley citada, en relación con el presupuesto y financiación, establece que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que haga sus veces dispondrán la asignación, reorganización y redistribución de los recursos presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimiento de la Ley 1098, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El artículo 201 de la Ley 1450 de 2011, contempló que en desarrollo del principio de corresponsabilidad y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno Nacional, con el concurso de los gobiernos territoriales, dará prioridad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), iniciando la construcción de Centros de Atención Especializada (CAES) e internamiento preventivo de acuerdo con criterios de demanda del SRPA, de cobertura regional y de cofinanciación de las entidades territoriales.

El párrafo 1o del citado artículo señaló que las entidades que hacen parte del SRPA, tanto de las diferentes ramas del poder público como de niveles de gobierno, sumarán esfuerzos



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

para contar con un Sistema de Información Unificado e interinstitucional del SRPA, para que sea fuente de información estratégica para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención del SRPA, de manera que permita la toma de decisiones adecuadas.

Se tiene igualmente que, dentro de las medidas establecidas en el artículo 8º de la Ley 1622 de 2013, se encuentra la de promover políticas de segunda oportunidad para jóvenes infractores de la Ley Penal que faciliten su reincorporación a la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación.

El artículo 7º de la Ley 1450 de 2011 facultó al Gobierno Nacional para que en desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, cree Sistemas Nacionales de Coordinación integrados por autoridades nacionales y territoriales, previa aceptación de estas.

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo precitado, las Entidades conformarán un órgano de coordinación y fijación de parámetros técnicos que serán vinculantes para los miembros del respectivo sistema en la adopción de las políticas concernientes. La implementación de dichas directrices será tenidas en cuenta para la aprobación de proyectos de inversión que se financien o cofinancian con recursos de la Nación.

El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes se articulará con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el Consejo Nacional de Política Social, Consejos Departamentales y Municipales de Política Social y con todas las instancias responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1885 de 2015, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SNCRPA en el nivel nacional y departamental, como una instancia para la coordinación y articulación institucional, intersectorial, ordenada y metódica para la fijación de parámetros técnicos, que entre otras realizará el seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en las leyes 906 de 2004 (Código de procedimiento Penal), 1098 de 2006, 1453 de 2011 (Código de la Infancia y la Adolescencia), 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil) y 1450 de 2011 (Plan nacional de Desarrollo 2010-2014), en lo relacionado con la responsabilidad penal para adolescentes, o las normas que las modifiquen, o sustituyan, respetando el marco de competencias constitucionales y legales de las entidades que lo conforman.

El ICBF es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.

Aquellos adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Penal sea o exceda de seis años de prisión, deben, por mandato legal ser reclusos en los Centros de Atención Especializada – CAE, que se constituyen en establecimientos donde se reciben a los como una medida pedagógica, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.

Esta obligación está regulada en el Código de la Infancia y Adolescencia, especialmente en el artículo 88 de la Ley 1453 de 11 que modificó el artículo 187 de la ley 1098 de 2006 :

**“ARTÍCULO 88. CONCEPTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.** El artículo 160 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:

***Artículo 160.** Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y experiencia probada; ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.*

*Los centros deben cumplir con las condiciones de seguridad para evitar la evasión de los adolescentes. Si el adolescente se evade, el juez deberá, de manera inmediata, ordenar su aprehensión y la revisión de la sanción.”*

La atención personalizada a los adolescentes y jóvenes se organizará por género y edades con el fin de dar respuesta a las finalidades del SRPA. Se realizarán actividades como sensibilización, participación en prácticas restaurativas de convivencia durante la atención, reflexión en torno del bien jurídico tutelado que ha sido afectado con el actuar del adolescente y entrega oportuna de los servicios establecidos en los estándares para cada modalidad.

Las acciones a desarrollar deben responder al concepto de los profesionales en la valoración inicial, a los intereses del adolescente y al compromiso familiar para el Plan de Atención Individual de la modalidad conforme a las fases y componentes del proceso de atención y la reflexión en torno del bien jurídico tutelado que ha sido afectado con el actuar del adolescente y la entrega oportuna de los servicios establecidos en los estándares para cada modalidad, señaladas en el Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley-SRPA.

El Defensor de Familia o quien haga sus veces verificará la garantía de derechos y se apoyará en el operador para exigir el acceso a servicios de salud, educación cultura, recreación.

Conforme lo indica el artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006, el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes requiere de unas condiciones específicas que permitan el cumplimiento de la finalidad plasmada en ese estatuto y especialmente contenida en la norma antes indicada que es del siguiente tenor literal:

**“ARTÍCULO 140. FINALIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES.** En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.*

*En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.*

**PARÁGRAFO.** *En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes.”*

Los artículos 160 y 161 ídem, en concordancia con el artículo 177 y 178 de la misma Ley, precisan el alcance de la medida de privación de la libertad, la cual solo puede imponerse a los mayores de 14 años y menores de 18, en establecimientos Públicos o privado, especializados y personal especializado, condiciones y medios idóneos:

**ARTÍCULO 160. CONCEPTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.** *<Artículo modificado por el artículo 88 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y experiencia probada; ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.*

*Los centros deben cumplir con las condiciones de seguridad para evitar la evasión de los adolescentes. (...)”*

**ARTÍCULO 161. EXCEPCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD.** *Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.”*

Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Código de Infancia y Adolescencia y en las normas relacionadas con la convención sobre los derechos del niño adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por la ley 12 de 1991, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar requiere contar con disponibilidad de infraestructuras adecuadas para la prestación del servicio en las condiciones establecidas en la ley, garantizando los espacios y predios necesarios que cumplan los parámetros de especialidad, idoneidad y seguridad adecuados.

## 1.2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Conforme se ha expuesto, el Estado debe concurrir en la protección de los niños, niñas y adolescentes, haciendo prevalecer las normas del Código de Infancia y Adolescencia por encima de las otras normas contenidas en otras leyes, tal como lo disponen los artículos 5º y 6º de la Ley 1098 de 2006:



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*“Artículo 5º. Naturaleza de las normas contenidas en este Código. Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.”*

*“Artículo 6º. Reglas de Interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.”*

*La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas.”*

Se tiene que, conforme a lo dispuesto por la Ley 65 de 1993<sup>1</sup>, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como encargado de los Centros de Atención Especializada, hace parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y frente a este sistema, la jurisprudencia constitucional ha señalado en distintas ocasiones, lo que respecta a un estado inconstitucional de cosas.

La Corte Constitucional en sentencia T -388 de 2013 reconoció la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Esta situación tiene como antecedentes la sentencia T-153 de 1998, donde la Corte constató por primera vez un estado de cosas contrario al orden constitucional en las penitenciarías y cárceles del país. Bajo ese parámetro se establecen órdenes de diferentes dimensiones, tendientes a cesar la violación masiva de derechos que se generan en dichos estados de cosas que resultan contrarios al ordenamiento. En estos casos, se considera necesaria la intervención del operador judicial constitucional para orientar la coordinación y articulación efectiva entre las distintas entidades (orden nacional y orden territorial) que desde sus competencias, deben resolver una situación que atenta intensamente contra las garantías constitucionales.

Bajo lo mencionado, se entiende que las entidades públicas de distintos órdenes están llamadas a velar y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y en el caso que nos ocupa será con mayor vehemencia, teniendo en cuenta que estamos frente a la protección de derechos de adolescentes hallados responsables de la comisión de delitos y que, por mandato constitucional, son sujetos de especial protección.

El predio ubicado en el corregimiento El Hormiguero VDA Valle del Lili, circunscripción del distrito de Santiago de Cali, que se identifica con el numero predial Z000302580000, ID0000004631, de propiedad del Departamento del Valle del Cauca, cumple con los parámetros establecidos por el ICBF en los lineamientos técnicos, para los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y que se les haya impuesto como

<sup>1</sup> Art. 15 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

sanción la privación de libertad en centro de atención especializado.

El Departamento del Valle del Cauca ha dispuesto que el inmueble de su propiedad continúe sirviendo al ICBF para la atención de los adolescentes que requieren atención especial, con el fin de aunar esfuerzos que permitan el logro de ese objetivo.

El ICBF, mediante documento con Radicado No: 202260500000225641 ha manifestado que requiere efectuar inversiones en el inmueble de la Gobernación que fue dado en comodato para la atención de los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y que se les haya impuesto como sanción la privación de libertad en centro de atención especializado. Por ello solicita la condonación de la deuda correspondiente al impuesto predial unificado, lo que permitiera disponer de esos recursos para invertir dichos recursos en obras que generan mayores beneficios a los adolescentes que están siendo atendidos por esa entidad.

La petición del ICBF es del siguiente tenor:

*“EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL VALLE DEL LILI se constituye en un lugar especial de atención para el restablecimiento de derechos en cumplimiento de los mandatos del artículo 45 de la Constitución Política de Colombia, La Ley 1098, los Tratados Internacionales, al haberse identificado la necesidad de esa protección especial en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, lo que hace la diferencia con cualquiera otro establecimiento de formación y permanencia de presuntos infractores de la ley.*

*Igualmente responderá el beneficio que se otorgue para el no pago del Impuesto Predial a una deuda social, evitando el colapso en el Sistema de Responsabilidad Penal con la supresión de cupos, en cumplimiento de obligaciones que impone el Estado Social de Derecho en razón al principio de corresponsabilidad, contando con la materialización del apoyo del ente territorial, en garantía de los derechos fundamentales de la población protegida en el Centro de Formación Valle del Lili.*

*Socialmente se ha evidenciado en la región un alto número de situaciones conflictivas y de hechos en los cuales se encuentran relacionados adolescentes por presunto conflicto con la ley penal, configurando a Valle del Cauca en una de las regionales con mayores solicitudes a nivel nacional para permanencia de los jóvenes en condición de población protegida, en la modalidad de internamiento preventivo, siendo el Centro de Formación Valle del Lili el punto de acopio de la región, con la garantía de encontrarse los adolescentes y jóvenes en la circunscripción y jurisdicción más cercana a donde reside la familia, en comunión con la Ley 1098 de 2006, contando con un mejor Centro Especial en Atención al restablecimiento de sus derechos”*

Igualmente, ha expuesto el ICBF la necesidad de contar con esos recursos para poder cumplir

7



( )

"POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

con las obligaciones que le impone la Constitución y la Ley. Afirma en su petición:

*"El ICBF, buscando el mejoramiento de sus programas misionales requiere efectuar remodelaciones en la infraestructura y en la operación misma, para lo cual solo cuenta con la suma de \$1.598.726.040, que serán invertidos en el programa misional que opera en el Centro de Formación de Valle del Lili, siendo insuficiente, razón por la cual requiere el apoyo tanto del Departamento como del Distrito para el mejoramiento del servicio.*

*En los últimos 3 años se han realizado inversiones en el Centro de Orientación Juvenil de Valle de Lili en infraestructura, las cuales se relacionan a continuación:*

*En septiembre de 2021 se realizó la intervención a la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP en el marco del contrato de obra 76005962021 cuyo objeto fue "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CENTRO DE FORMACION JUVENIL VALLE DEL LILI, QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES ADSCRITOS AL ICBF REGIONAL VALLE" con una inversión de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$163.628.870)** con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2021, la cual a la fecha se encuentra en funcionamiento.*

*Durante la vigencia 2022, el área misional de la Subdirección de Responsabilidad Penal ICBF, ha contado con recursos disponibles para poder realizar inversión e intervenir la infraestructura con el fin de atender las necesidades que presenta el Centro de Orientación juvenil actualmente, y mejorar las condiciones para los adolescentes, jóvenes y personal administrativo. Sin embargo, hasta que no se suscriba el convenio tripartito que se tiene proyectado con la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca e ICBF, y se definan los recursos que aportaran las entidades en comento en dicho Convenio, para unificar una sola bolsa de inversión en aras de atender la mayor parte de las necesidades que requieren prioridad de atención en el COJ Valle Lili, no será posible que el ICBF realice alguna inversión en el inmueble en la presente vigencia.*

*Por parte del ICBF se han realizado las evaluaciones técnicas correspondientes para establecer las necesidades que presenta el Centro de Orientación Juvenil en el último año, encontrando los siguientes aspectos dentro de las prioridades establecidas:*

- DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
- CAJAS Y POZOS DE INSPECCION
- BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS
- SALIDAS SANITARIAS
- SISTEMA DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA
- TABLERO DE 42 CIRCUITOS
- PAÑETES-RESANES-PINTURA
- CUBIERTAS
- ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS
- PUERTAS Y CERRAJERIA
- ILUMINACIÓN



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*Dentro de otros aspectos encontramos la intervención total del Edificio Administrativo (Demolición y Construcción), la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la reubicación temporal de las áreas administrativas en contenedores y/o construcciones modulares (temporal) hasta la culminación de las obras para el nuevo Edificio Administrativo.*

*El centro de internación se encuentra activo y el ICBF cada día el mejoramiento en la prestación del servicio de sus programas misionales conforme a los recursos que se le asignen.*

*Adicionalmente, la condonación que se solicita para el inmueble donde funciona el Centro de Formación Juvenil de Valle del Lili, a cargo del ICBF, garante en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, es de la Gobernación del Valle, y el servicio que se presta es de los protegidos constitucionalmente. Las dos entidades son publica y sus servicios son beneficio para la comunidad.*

*Los recursos que sean condonados serán muy importantes en la inversión que se pretende en el Centro Juvenil y redundan en beneficio de los jóvenes que allí se encuentran, con los que se existe una evidente obligación del estado en todas sus instancias, nacionales, departamentales y distritales.*

*Por el contrario, imponer el pago de esa carga tributaria afecta en forma significativa la prestación de servicios a cargo del Centro de Formación Valle del Lili, es decir, cómo el pasivo que recae en el patrimonio del ICBF amenaza con interrumpir o desmejorar la situación de personas de especial protección constitucional atendidas en dicho centro.”*

El Distrito de Santiago de Cali, por su parte, pretende contribuir al logro de los objetivos propuesto por el ICBF en la defensa y protección de los adolescentes, conforme a la obligación asignada en el Código de la Infancia y la Adolescencia, expedido a través de la Ley 1098 de 2006, las normas que la han modificado y reglamentado, condonando la deuda que por impuesto predial tiene el predio del Departamento dado en comodato al ICBF para la atención de los adolescentes que requieren atención especial y que con esos recursos, se pueda generar mayor inversión para el bienestar de los adolescentes privados de la libertad.

Es preciso concurrir con la Gobernación del Valle y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la búsqueda de soluciones para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución, la Ley, los Tratados internacionales, respecto de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, a la luz de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1098 de 2006:

*“Artículo 7º. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.*



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.*

Para ello, el Distrito presenta a consideración la condonación del valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado e intereses, que se adeuda por las vigencias 2014 a 2022, por el inmueble número Z000302580000 ID0000004631, de propiedad del Departamento del Valle del Cauca, donde funciona el Centro de formación Valle del Lili, por valor de **MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/te \$1.515.930.660**

La medida que se pretende adoptar en el presente proyecto de acuerdo, redundará en el proceso de resocialización del adolescente que infringe la ley, teniendo en cuenta que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes está creado bajo dos preceptos:

- i) Respeto a las garantías que la Constitución y la Ley le otorgan a los adolescentes; y
- ii) Los deberes que deben asumir, tanto los adolescentes como sus familias, cuando los jóvenes se han visto involucrados en delitos; cuya base está determinada en la Justicia restaurativa, donde se involucran procesos pedagógicos, específicos y diferenciados, y las medidas a seguir tienen la finalidad de ser protectora, educativa y restaurativa donde él o la adolescente toma conciencia de la conducta punible en la que incurrió y sus consecuencias, explora soluciones al conflicto generador de la misma, y se transforma en prácticas, sentidos de vida y entornos significativos con la participación de las familias, comunidades e instituciones competentes, en este marco.

Conforme a ello, el tratamiento que se debe impartir a través del Estado a los adolescentes infractores, no es dirigido a sancionar sino a resocializar y brindar oportunidades en la sociedad. Este objetivo debe ser el norte que guía a las distintas entidades que armónicamente deben prestar su concurso y apoyo.

La condonación de la deuda que actualmente tiene la Gobernación del Valle por el bien inmueble donde funciona el CENTRO DE FORMACION VALLE DE LILI, permitirá que, a partir del año 2023, pueda beneficiarse de las exoneraciones que apruebe el honorable concejo Municipal en materia de impuesto predial.

Esta decisión se justifica atendiendo lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Código de la Infancia y Adolescencia que indican:

*Artículo 9º. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.*

4



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.*

*Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.*

*La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.*

*No obstante, lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.”*

## **2. - BENEFICIO AL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL**

### **2.1 ANTECEDENTES**

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel es una institución sin ánimo de lucro creada por Acuerdo N° 11 del 23 de mayo de 1917, reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca mediante Resolución N° 4013 del 19 de diciembre de 1964, transformado en Empresa Social del Estado del orden municipal por el Acuerdo 08 de agosto 16 de 1995, expedido por el Concejo de Santiago de Cali, adscrito a la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, con autonomía presupuestal y administrativa, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención como servicio público a cargo del Estado y como parte del servicio público de seguridad social y demás servicios complementarios tendientes a garantizar el bienestar integral de la población de la tercera edad del Distrito de Santiago de Cali.

El objeto social del hospital es mejorar las condiciones de vida y lograr la protección de la vejez desamparada, pobre y vulnerable del Municipio de Santiago de Cali, en virtud del deber constitucional que tiene el estado en el artículo 46 de la Constitución de Colombia, de concurrir con la sociedad y la familia para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promover la integración a la vida activa y comunitaria, para lo cual deberá garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Para el logro de su objeto social, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E actualmente cuenta con tres unidades de prestación de servicios que buscan satisfacer las necesidades de la población vulnerable de la tercera edad en Cali. La *primera* unidad, contempla la prestación de servicios de Salud; la *segunda*, integra la prestación de servicios conexos a la salud, como manutención, cuidado paliativo, albergue y servicios de ancianato. Finalmente, la *tercera* unidad de negocios es el Centro Vida.



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

La E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, no tiene ánimo de lucro y los recursos que percibe provienen especialmente de los aportes que recibe del Distrito de Santiago de Cali, los cuales son insuficientes para atender en forma integral a las personas de la tercera edad que se han asignado a su cuidado.

## 2.2 NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, cuenta actualmente con 103 años de funcionamiento continuo, trabajando con adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando servicios de albergue y atención para este segmento de la población, atendiendo la problemática social que se presenta con el abandono y descuido de los adultos mayores. Para ello, desde un enfoque de la protección social y envejecimiento activo, y a través de un conjunto de intervenciones, se buscan disminuir la vulnerabilidad de las personas mayores pobres, a través de una asistencia integral que se materializa en un hogar o centro de cuidado y acogida para adultos mayores dependientes e independientes, garantizando sus necesidades básicas en una estancia permanente.

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, es propietario del inmueble ubicado en la Cra. 70 #2A-04, circunscripción del Distrito de Santiago de Cali, que se identifica con el número predial F058500010000 ID 0000043133, en donde hace más de un (1) siglo se trabaja con adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando servicios de albergue y atención para este segmento de la población.

La condonación solicitada al concejo para este predio se concreta en la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS \$2.347.849.545** correspondiente al impuesto predial que adeuda por las vigencias de los años 2016 al 2022 y la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS. \$755.863.529**, correspondientes a la Contribución de Valorización y los intereses adeudados por El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, por el inmueble, identificado con el número F058500010000 ID 0000043133.

En la solicitud que el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, presenta al distrito mediante radicado 2022417301013856-82, hace una descripción de cómo prestan los servicios y en que se invertirá los recursos que no cancelen por concepto de los tributos.

*“Para el logro de su objeto social, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E actualmente cuenta con tres unidades de prestación de servicios que buscan satisfacer las necesidades de la población vulnerable de la tercera edad en Cali. La primera unidad, contempla la prestación de servicios de Salud; la segunda, integra la prestación de servicios conexos a la salud, como manutención, cuidado paliativo, albergue y servicios de ancianato. Finalmente, la tercera unidad de negocios es el Centro Vida.*



( )

**“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

*Los servicios que se prestan son del primer nivel de atención como servicio público a cargo del Estado y como parte del servicio público de seguridad social y demás servicios complementarios, propendiendo por el bienestar integral a los adultos mayores del sur occidente colombiano, asegurando los determinantes sociales con investigación y docencia y con un recurso humano multidisciplinario calificado y comprometido, haciendo uso eficiente de los recursos con responsabilidad social.*

*Al ser la entidad sin ánimo de lucro, el sostenimiento para esta población depende de lo que se recibe por parte del Distrito Santiago de Cali a través de la secretaria de Bienestar Social, siendo insuficientes, para atender otras obligaciones diferentes a su objeto social, como el pago de tributos.*

*El Plan de Desarrollo del Distrito Santiago de Cali 2020-2023 “Cali Unida por la vida” a través de la Dimensión 2 “Cali, Solidaridad por la vida” orientada hacia la solidaridad, la inclusión social y cultural desde el enfoque de derechos del desarrollo humano, la ética y la protección de los seres sintientes, propone a través de su programa: “Personas mayores envejecimiento con bienestar” fortalecer la promoción, la participación activa y la inclusión social del adulto mayor, con el objetivo de brindar una atención integral que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, además de promover la gestión del conocimiento sobre el envejecimiento y vejez.*

*El Distrito de Santiago de Cali, en cumplimiento de esas metas del plan de desarrollo, ha generado acciones a través de la Secretaria de Bienestar Social, aportando al cumplimiento del programa: “Personas mayores envejecimiento con bienestar” a través del indicador: Personas mayores atendidas en modalidad hogar larga estancia y hogar de paso, suscribiendo convenio con el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, para la atención de 270 adultos mayores en estado de vulnerabilidad social y económica ofreciéndoles una atención integral a través de:*

- *Residencia: Alojamiento, alimentación de acuerdo a cada patología, vestuario, lavandería, aseo, arreglo de uñas, peluquería, atención espiritual, servicios funerarios, talleres educativos, recreación, talleres ocupacionales y lúdicos.*
- *Servicios sanitarios: Acompañamiento y cuidado por auxiliar de enfermería 24 horas, atención médica permanente, médico especializado permanente en geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, atención psicosocial permanente (psicología, trabajo social y gerontología), acompañamiento a citas médicas y hospitalizaciones fuera de la Institución.*

*Por las razones anteriores, se requiere contar con la autorización para el no pago de los valores correspondientes al impuesto predial y valorización adeudados a la fecha, recursos que serían invertidos en el bienestar de los adultos mayores creando espacios culturales y recreativos que permitan la ampliación del espacio de vida, generando con ello mayor independencia, autonomía, auto realización y sobre todo la interacción del adulto mayor con el medio social cambiante.*

*Con ello se lograría fortalecer la ocupación y la inserción de los adultos mayores en actividades de terapia ocupacional tales como huertas, manualidades y emprendimientos que les permitan la*



( )

"POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

*ocupación del tiempo libre y a su vez genere en ellos la reactivación de su potencial de habilidades para el trabajo, generando posibles unidades de negocio que beneficien al adulto mayor y a la Institución.*

*Se requiere por parte del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel generar espacios de integración o de participación intergeneracional que ayude a los adultos mayores y otras generaciones a valorar el sentido de la adultez y a educarse para afrontarla de una forma coherente, aportando a uno de los objetivos del programa: "Personas mayores, envejecimiento con bienestar" del Plan de Desarrollo 2020-2023. Promover la gestión del conocimiento sobre el envejecimiento y la vejez.*

*Esas acciones contribuyen al cumplimiento de los derechos constitucionales que establecen un régimen de protección para este grupo poblacional fundamentado en el principio de solidaridad, orientado al logro de los fines esenciales de la organización política (artículos 1 y 2 C.N.), el derecho fundamental a la igualdad que se traduce en la protección de personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 C.N.) y la tutela jurídica específica frente a los adultos mayores que cubre a los ancianos en estado de indigencia por mandato expreso de la norma (artículo 46 C.N.).*

*Por lo anterior comedidamente le solicitamos al Distrito que presente ante el concejo un proyecto de acuerdo que nos otorgue el beneficio tributario consistente en el no pago del impuesto predial y la contribución de valorización adeudados, lo que redundará en una mejor la calidad de vida y servicios de salud a los adultos mayores desamparados, pobres y vulnerables de Santiago de Cali y al cumplimiento de manera eficiente a lo consagrado en el artículo 46 de la C.N. "El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".*

Igualmente le permitirá que a partir del año 2023 se pueda acoger a las exoneraciones que apruebe el honorable concejo Municipal en materia de impuesto predial.

Es por ello, que ante su difícil situación, ha solicitado que el Distrito presente al concejo la iniciativa con el fin de solucionar la grave situación financiera que atraviesa actualmente.

El Distrito pretende concurrir con otras entidades para el cumplimiento de su deber constitucional consagrado en los artículos 44 y 45 que a la letra dicen:

**ARTICULO 44.** *Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.*



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.*

*Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.*

Así tenemos además que la Corte Constitucional ha sostenido en sentencia C-250 de 2019, lo siguiente:

*“...la Corte ha indicado en plurales decisiones que el artículo 44 de la Constitución reconoce la naturaleza esencial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cual se deriva de su propia existencia como sujetos a quienes la familia, la sociedad y el Estado les debe atención y cuidado; por ello, esta Corporación en las Sentencias C-041 y T-283 de 1994, estableció una nueva categoría de sujeto de especial protección constitucional, en aplicación de la regla pro infancia.*

*Sobre el amparo especial del niño y sus principios, refirió la Corte en la Sentencia C-569 de 2016, que “[l]a protección especial de los niños en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales que se refieren al tema se justifica por la necesidad de garantizar su dignidad humana, en virtud de la cual debe reconocerse a las personas como sujetos autónomos de derechos. A los niños, como todas las personas, les es inherente el principio de la dignidad humana (Preámbulo de la Constitución), el cual les garantiza, entre otras, la posibilidad de tener un plan de vida y de tomar decisiones de acuerdo con este plan”<sup>[103]</sup> (Negrilla fuera de texto).*

*19. En la misma línea, el Comité de los Derechos del Niño -encargado de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño-, identificó cuatro principios generales que deben regir la actuación del Estado para proteger a los niños<sup>[104]</sup>, decantados en la sentencia ya señalada, en la cual se adiciona otro principio procedente del artículo 44 de la Constitución, que coinciden con los criterios utilizados por esta Corte para resolver casos que han involucrado la protección de derechos fundamentales de los niños<sup>[105]</sup>.*

*20. Esos principios son los siguientes:*

*(i) La **no discriminación**, el cual requiere que los Estados “identifiquen activamente a los niños y grupos de niños en relación con los cuales puede ser necesario adoptar medidas especiales para el reconocimiento y la realización de sus derechos”.*

*(ii) El **interés superior del menor**, previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular en el numeral 1º del artículo 3º, de acuerdo con el cual “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”<sup>[107]</sup>.*



( )

**“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

*Este principio tiene expresa consagración en el artículo 44 de la Constitución, cuyo último inciso señala que “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”*

*(iii) El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el cual debe ser entendido en su concepto integral, que abarca “el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”.*

*(iv) El respeto a las opiniones del niño, en virtud del cual debe reconocerse al niño como “participante activo en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos.*

*Además, la Corte observa que este principio guarda plena coherencia con una concepción del niño como sujeto titular del derecho a la dignidad humana, a quien debe reconocérsele de manera progresiva mayor autonomía para definir su proyecto de vida y llevar a cabo acciones encaminadas a lograrlo.*

*(v) La protección del menor frente a riesgos prohibidos, procedente del inciso 1º del artículo 44 de la Constitución, que establece que los niños “[s]erán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. La Corte ha entendido que este principio obliga al Estado a “resguardar a los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debe proteger frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico”.*

### **3. CON LA INICIATIVA SE PRETENDE CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CUMPLIR MANDATOS CONSTITUCIONALES.**

El principio de solidaridad consagrado en varias normas superiores, *“impone una serie de “deberes fundamentales” al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos”*. Por lo tanto, este principio se manifiesta como deber del Estado Social de Derecho a través de estos *“deberes fundamentales”* que en ciertos escenarios se refuerzan, cuando se trata de asegurar a sujetos en condiciones desfavorables, la protección de todas las facetas de sus garantías fundamentales.

La Carta proyecta este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de especial protección para personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art. 43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y discapacitadas (art. 47) y los ancianos (art. 46), entre otros.

De este modo, es posible afirmar que la Constitución establece un régimen de protección para este grupo poblacional fundamentado en el principio de solidaridad, orientado al logro de los fines esenciales de la organización política (artículos 1 y 2 C.N.), el derecho fundamental a la igualdad que se traduce en la protección de personas en condición de debilidad manifiesta

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

(artículo 13 C.N.) y la tutela jurídica específica frente a los adultos mayores que cobija a los ancianos en estado de indigencia por mandato expreso de la norma (artículo 46 C.N.), y la protección especial a los menores de edad, (artículos 44 y 45)

La Corte Constitucional en sentencia C-413/2013, ha fundado dicha obligación en el principio de solidaridad, aduciendo este como:

*“Un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”.*

(...)

*“este principio se traduce en la exigencia dirigida especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos. Tal es el caso de las personas que se encuentran en situación de indigencia”* (Subrayas propias)

El Distrito pretende concurrir con otras entidades, en su carácter en el cumplimiento de su deber constitucional consagrado en el artículo 46 que a la letra dicen:

**ARTICULO 46.** *El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.*

Respecto de las personas de la tercera edad, la Corte Constitucional ha efectuado importantes pronunciamientos, determinando el alcance del mandato constitucional, en muchas providencias, entre las cuales se puede traer a colación el pronunciamiento dado en sentencia C -503/2014 han señalado:

*“El Constituyente de 1991 consagró como una obligación constitucional del Estado Social de Derecho la concurrencia en el cuidado de la vejez.*

*De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado, de manera reiterada, que la población de la tercera edad, se encuentra comprendida dentro de la categoría de los sujetos de especial protección constitucional.*



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*Dentro de los grupos poblacionales que la Corte ha reconocido como sujetos de especial protección constitucional en razón a su condición de debilidad manifiesta, se encuentran las personas inmersas en situación de pobreza extrema. Sobre este sector, ha reconocido que de la naturaleza del Estado colombiano emana el deber de atención a las personas carentes de recursos económicos necesarios para una congrua subsistencia, que no tienen capacidad para laborar por motivos de edad o salud. Especial énfasis se ha hecho en la protección especial de quienes además de no contar con ingresos suficientes se encuentran en una edad avanzada. En ese sentido, se ha señalado que cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o psíquicas que permiten la autodeterminación de la persona en estado de [pobreza] se han visto disminuidas, surge un deber de atención a ésta por parte del Estado de dirigir su conducta al apoyo de este miembro de la sociedad (Negrillas y subrayas para destacar)*

#### 4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS

El beneficio tributario correspondería en:

- A) PARA EL PREDIO DE LA GOBERNACION DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE FORMACIÓN VALLE DEL LILI, con el fin de lograr la garantía de los derechos de los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y se les haya impuesto como sanción la privación de libertad en el centro de atención especializado, la suma de **MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/TE \$1.515.930.660** correspondiente al Impuesto Predial y sobretasa bomberil con sus correspondientes intereses, por las vigencias 2014 al 2022, que adeuda por el inmueble, identificado con el numero predial Z000302580000 ID0000004631, valor que será condonado. Ello redundará en el bienestar de los adolescentes. Queda excluida la condonación por concepto de Sobretasa Ambiental, toda vez que la entidad territorial actúa como mero recudador de la misma.
- B) PARA EL PREDIO DEL HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL ESE, para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y protección su integración a la vida activa y comunitaria, en la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS \$2.347.849.545** correspondiente al Impuesto Predial y sobretasa bomberil, con sus correspondientes intereses, que adeuda por las vigencias de los años 2016 al 2022 y la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS. \$755.863.529**, por concepto de la Contribución de Valorización, del inmueble, identificado con el número predial F058500010000 ID 0000043133, valores que serán condonados. Queda excluida la condonación por concepto de Sobretasa Ambiental, toda vez que la entidad territorial actúa como mero recudador de la misma.

11



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

##### 5. CONDICIONES ESPECIALES QUE PERMITEN LA ANMISTIA DE IMPUESTOS PARA LOS INMUEBLES DE LA GOBERNACION DEL VALLE Y DEL HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

La condonación está dirigida a que esas entidades no tengan que cancelar el valor adeudado del impuesto predial por la vigencia 2022 y anteriores, el cual podría ser catalogado como una amnistía tributaria, la que en estos casos es totalmente justificada, necesaria y urgente, dadas las condiciones especiales que rodean el deber constitucional y legal a cargo del estado en relación con los adolescentes y los adultos mayores a la luz de lo expuesto por la Corte Constitucional, especialmente en su sentencia C-060-2018, de la cual es importante extraer:

“La prohibición constitucional de las amnistías tributarias injustificadas

(...)19. Al menos dos fuentes normativas de índole constitucional sustentan la prohibición de las amnistías tributarias. En primer lugar, el artículo 95-9 de la Constitución determina como deber de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, de manera que una previsión legal que suprima ese deber en una situación concreta se presume inconstitucional, salvo que cumpla con un juicio estricto para su validez excepcional.

(...)

20. La jurisprudencia constitucional<sup>[56]</sup> define las amnistías tributarias como modalidades extintivas del deber fiscal, en la cual opera una condición o remisión de una obligación tributaria preexistente. En ese sentido, se diferencian de las exenciones en que se aplican cuando luego de haberse configurado la obligación del sujeto pasivo y encontrándose pendiente del cumplimiento de la misma, se les condona el pago de sumas que debía asumir por concepto de la obligación, o de sus sanciones, intereses, etc. Esto en razón del cumplimiento de determinados requisitos por parte del sujeto pasivo, que lo hacen acreedor del beneficio. Así, “mientras las exenciones operan de manera anticipada, evitando que se genere el gravamen, en el caso de la amnistía se está condonando una obligación tributaria que ya se ha causado.”<sup>[57]</sup>

El mismo precedente se ocupa de establecer los escenarios en los que se está ante una amnistía tributaria, así como las condiciones para su validez constitucional. En efecto, la **sentencia C-833 de 2013**<sup>[58]</sup> declaró la inexecutable de una norma que establecía medidas de saneamiento respecto de activos omitidos y pasivos inexistentes en declaraciones de renta y complementarios, al concluirse que los beneficios allí previstos configuraban una amnistía tributaria injustificada. Para arribar a esta conclusión, planteó las siguientes premisas, que ahora resultan útiles para resolver el problema jurídico materia de esta decisión.

20.1. Al margen de la denominación del beneficio tributario, se está ante una amnistía cuando, “ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad.” En ese sentido,



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*se predica una amnistía tributaria cuando el beneficio opera con posterioridad a la exigibilidad de la obligación fiscal.*

20.2. Como se expresó en precedencia, “las amnistías tributarias comprometen, prima facie, los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones.”

20.3. Aunque en el corto plazo las amnistías concurren en el cumplimiento de fines constitucionalmente valiosos, en especial (i) el aumento del recaudo y la ampliación de la base tributaria; y (ii) el ahorro de recursos públicos utilizados en las labores de fiscalización y sanción; su uso recurrente genera un desincentivo para el pago oportuno de las obligaciones tributarias, ante la expectativa de una legislación futura que confiera beneficios a quienes han incurrido en mora. Así, desde la perspectiva del actor racional de mercado y ante la proliferación de normas fiscales con efectos de amnistía, la postura más acertada sería incurrir en mora, en abierta contradicción con el deber constitucional de tributar.

20.4. La validez constitucional de la amnistía, en ese orden de ideas, no puede estar fundamentada en el logro de mayores ingresos fiscales o en el aumento de la eficiencia y eficacia del recaudo, sino en una justificación que supere las condiciones de un juicio estricto de proporcionalidad. Por lo tanto, “corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la medida, para lo cual ha empleado el test de razonabilidad o principio de proporcionalidad.

20.5. (...)

(...)”

## 6. CUMPLIMIENTO DEL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD

La Corte Constitucional, mediante la sentencia No. C-743 de 2015 ha dejado sentado cuales son los elementos que configuran la “estructura del juicio estricto de proporcionalidad” de las amnistías, bajo el siguiente análisis:

**“La estructura del juicio estricto de proporcionalidad.**

48. (...)

*En atención a ello y no obstante la amplia libertad de configuración del Congreso en esta materia, en los casos de amnistía se impone una carga justificativa especialmente exigente. Esa carga, a su vez, impone a este Tribunal la obligación de aplicar un juicio de proporcionalidad que, por las exigencias que plantea, reduce significativamente el margen*





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

De 2022

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*de acción de las autoridades que participan en la creación del régimen tributario. En esa dirección, la constitucionalidad de las medidas mediante las cuales se instrumenta la amnistía, dependerá de que se encuentre (i) que persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa, (ii) que son efectivamente conducentes, (iii) que son necesarias y, finalmente, (iv) que son estrictamente proporcionadas<sup>[62]</sup>.*

*48.1. La finalidad de una medida será imperiosa si resulta de tal trascendencia constitucional que su realización es inaplazable o urgente. No basta en estos casos que la finalidad no se encuentre prohibida por la Constitución o que sea posible atribuirle algún grado de importancia. No. En estos casos el objetivo buscado por el legislador debe revestir un grado extremo de trascendencia constitucional en tanto la medida incide, afectándolos seriamente, importantes requerimientos de la Constitución.*

*48.2. El examen de efectiva conducencia (idoneidad) exige que la medida empleada permita, con un alto grado de probabilidad según la evidencia empírica existente, alcanzar el objetivo invocado. No es suficiente, como cuando es del caso aplicar un juicio débil de proporcionalidad, que el medio empleado pueda servir para alcanzar el propósito. En el juicio estricto la superación del examen de idoneidad exige contar con argumentos empíricos poderosos que demuestren, casi al nivel de certeza, que la finalidad imperiosa invocada puede ser alcanzada con la aplicación del medio elegido.*

*48.3. El juicio de necesidad impone determinar si el medio empleado es imprescindible para alcanzar el propósito o si, por el contrario, existen medidas alternativas que no restrinjan, o lo hagan en menor medida, el principio constitucional afectado. Este examen, que plantea algunas de las más complejas tensiones en el ejercicio del control constitucional de medidas legislativas, impone a la autoridad demostrar que desde el punto de vista fáctico no existen instrumentos menos lesivos para el principio afectado que aquel que fue elegido. Ello impone (a) un deber de valorar todas las alternativas efectivamente conducentes a fin de establecer el grado de impacto que tienen en el principio afectado y, una vez adelantada tal valoración, (b) una obligación de identificar la medida que tenga menos injerencia en el principio.*

*48.4. Finalmente, en caso de superar las anteriores etapas del juicio, deberá establecerse si la medida es estrictamente proporcionada, esto es, deberá determinar la Corte Constitucional si la importancia de las razones que apoyan el empleo del medio puede justificar la intensidad de las restricciones sobre los principios afectados. Esta etapa del juicio de proporcionalidad, según ha tenido oportunidad de advertirlo este Tribunal exige comparar (a) el peso o valor abstracto de los principios que colisionan, (b) el grado específico de afectación que la aplicación o no de la medida que se juzga pueda tener en cada uno de los principios que se enfrentan y (c) el nivel de certeza de las premisas fácticas con apoyo en las cuales se determina el grado de afectación<sup>[63]</sup>.*

*Un ejemplo de desproporción evidente de una medida es aquel evento en el cual, de un lado, el valor constitucional abstracto del principio restringido con el empleo de la medida adoptada por el Congreso es muy alto, su grado de afectación concreta es intenso y dicho*



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

*grado de afectación está respaldado por un indiscutible apoyo fáctico y, de otro, el valor constitucional abstracto del principio que se invoca para justificar la medida tiene una reducida importancia constitucional, el no empleo de la medida comporta una afectación leve de dicho principio y, adicionalmente, existen altos niveles de incertidumbre acerca de dicha afectación. Si lo que ocurre es precisamente lo contrario, podrá afirmarse la proporcionalidad en sentido estricto de la medida legislativa.*

Bajo este criterio de la Corte Constitucional, debemos efectuar el análisis de la iniciativa que se somete a consideración del Concejo, con el fin de demostrar que se cumple con este parámetro:

6.1 Respecto del predio de propiedad de la Gobernación del Valle donde funciona el CENTRO DE FORMACIÓN VALLE DEL LILI:

La medida que se pretende adoptar cumple con el presupuesto de excepcionalidad pues, como se pudo evidenciar en lo sustentado previamente, la condonación a efectuar no es una amnistía que se venga adelantando repetitivamente y, por el contrario, permitiría en el caso concreto la materialización y cumplimiento de deberes constitucionales en cabeza del Estado.

De no acogerse esta medida se producirá un colapso en el Sistema de Responsabilidad Penal, pues conlleva a la entidad a la supresión de cupos, generando un verdadero caos en detrimento de los adolescentes atendidos.

Socialmente se ha evidenciado en la región un alto número de situaciones conflictivas y de hechos en los cuales se encuentran relacionados adolescentes por presunto conflicto con la ley penal, configurando a Valle del Cuaca en una de las regionales con mayores solicitudes a nivel nacional para permanencia de los jóvenes en condición de población protegida, en la modalidad de internamiento preventivo, siendo el Centro de Formación Valle del Lili el punto de acopio de la región, con la garantía de encontrarse los adolescentes y jóvenes en la circunscripción y jurisdicción más cercana a donde reside la familia, en comunión con la Ley 1098 de 2006, contando con un mejor Centro Especial en Atención al restablecimiento de sus derechos.

6.2 Respecto al predio de propiedad del HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, se cumplen con los presupuestos que permiten demostrar la excepcionalidad de la medida, pues la situación financiera que atraviesa actualmente el Ancianato San Miguel reviste esta característica.

El informe presupuestal y financiero a junio de 2022, que presento el gerente encargado de Ese Hospital Geriátrico, evidencia falta de liquidez para los compromisos contractuales, requiriendo un plan financiero de choque que se centre en la generación de mayores ingresos y sostenimiento o disminución de los gastos. Es claro que hay un gran riesgo que esta institución que tanto bienestar le brinda a nuestros ancianos y personas de la tercera edad, muchos sin capacidad de pago, deba ser cerrada por falta de recursos.



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Con lo anterior se requiere una inyección de recursos financieros para sanear los pasivos no corrientes que en este momento no pueden ser amortizados por falta de flujo de caja y una disminución de los pasivos. Con esto, la ESE tendría una categorización del riesgo menor. 2. Adicional al punto anterior, actualmente la ESE está presentando un desequilibrio presupuestal, porque presenta un rezago en la ejecución de ingresos generando un déficit. Esta situación generaría automáticamente una nueva categorización del riesgo alto debido a que los ingresos no superan los gastos a nivel presupuestal. Así las cosas, la ESE debe reducir sus gastos o generar los reconocimientos necesarios para subsanar el déficit fiscal en lo que queda de la vigencia

La E.S.E Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel pretende lograr antes que se termine el año 2022 tener aprobado e iniciar la ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF, antes de una eventual intervención. Con esto, puede realizar gestión en la consecución de recursos que le permitan realizar inversión que posteriormente, refleje ingresos para la ESE tanto en el componente de salud como en los servicios conexos (albergue). Sin embargo, a la fecha ese valor de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS \$2.347.849.545 correspondiente al Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental y sobretasa bomberil, con sus correspondientes intereses, que adeuda por las vigencias de los años 2016 al 2022; y la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS \$755.863.529, por concepto de la Contribución de Valorización, del inmueble, hacen inviable se apruebe la propuesta de del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF. Por la Superintendencia Nacional de Salud”, conforme lo ha expuesto en el oficio N° 1-2019-240310 del 4 de junio del 2019 haciendo alusión a la Circular Externa 001 del 2018, sobre el “Régimen de autorización previa de reformas estatutarias en prestadores de servicios de salud” dirigida a los representantes legales de las IPS públicas, en la que se indica de manera puntual: “...A las IPS no les está permitido acogerse a procesos de insolvencia o de reorganización en los términos previstos en la Ley 1116 del 2006, ya que su prohibición, tal como está estipulado en la ley, es taxativa, y a la luz de las normas transcritas anteriormente no es posible iniciar procesos de reorganización empresarial para sociedades comerciales constituidas como IPS; en este caso, lo que resultaría sería su liquidación.

El Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel es una institución del Distrito y por la labor tan importante que presta, en beneficio de una población que cuenta con especial protección constitucional, se impone generar acciones que le brinden un nuevo aire a la institución y le permita continuar prestando el servicio a la población mayor del distrito, en su gran mayoría sin recursos para su sostenimiento.

#### **LA FINALIDAD DE LA MEDIDA SERÁ IMPERIOSA**

Respecto a LA GOBERNACIÓN DEL VALLE- CENTRO DE FORMACIÓN VALLE DEL LILI, tal como se ha expuesto a lo largo de esta exposición de motivos, la medida de amnistía del predio de propiedad de la Gobernación del Valle, tiene como finalidad, cumplir una obligación



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

urgente e inaplazable impuesta en mandatos constitucionales que establecen la protección de los menores de edad, consagrados en los artículos 44 y 45. Igualmente, la medida se enfoca en el cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Infancia y Adolescencia, en los que se definen claramente las obligaciones a cargo del estado, incluidas en esta definición jurídica, la nación, departamentos y municipios. Por tanto, el Distrito no es ajeno al cumplimiento de las obligaciones, en los términos del artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, que a la postre dice:

*“Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.*

*La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.*

*No obstante, lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.”*

Respecto del predio del Hospital Geriátrico San Miguel, ESE, se cumple con este parámetro establecido por la corte Constitucional, al considerar, que tal como lo define el artículo 46 de la Constitución, las personas de la tercera edad gozan de una protección especial que debe ser cumplida por parte del Estado y la Familia. Ese es el objetivo perseguido por la ESE Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, quien atiende a las personas que no cuentan con recursos para su subsistencia, requiriendo del apoyo decidido del Estado. Así, tenemos que la protección a la población adulto mayor reviste una especial importancia y en esa medida, la adopción de la medida resulta urgente e inaplazable.

En conclusión, se cumple con el criterio exigido por la Corte Constitucional para estas medidas, por cuanto “... el objetivo buscado por el legislador debe revestir un grado extremo de trascendencia constitucional en tanto la medida incide, afectándolos seriamente, importantes requerimientos de la Constitución.”

#### **QUE SEAN EFECTIVAMENTE CONDUCENTES**

La Gobernación del Valle del Cauca, es propietaria del inmueble ubicado en el corregimiento Hormiguero VDA Valle del Lili, el cual cuenta con las condiciones especiales exigidas en los lineamientos técnicos dictados por el ICBF para que pueda ser destinado a centro de atención especializado para los adolescentes que les sean aplicadas dichas medidas. Por lo tanto, la medida que pretende adoptar es idónea, por cuanto cuenta con un alto grado de probabilidad según la evidencia empírica existente, de alcanzar el objetivo invocado. Ello permitirá que el





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

De 2022

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

ICB pueda alcanzar la protección integral de los adolescentes que requieran la medida de privación de la libertad.

Respecto del bien inmueble del Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel, ESE, es una institución sin ánimo de lucro y como tal, su mayor recurso es el que proviene del mismo Distrito, con el fin de que se atienda la población de personas de la tercera edad que no cuentan con familia ni con red de apoyo.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el Valle del Cauca se encuentran 460.000 personas en el rango de edad de más de 60 años y la mayor proporción se encuentran en Cali (324.641). Además, según información de la secretaria de Participación y Desarrollo Social, el total de adultos atendidos en centros de vida y bienestar para adultos mayores asciende a 7.176 al mes de enero de 2016, con presencia en 29 municipios

El estado debe contribuir en su obligación de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores garantizándoles una vejez digna, realizando una gestión social integral que ataque las principales problemáticas que se presentan en esta población, que en su gran mayoría presentan enfermedades crónicas como:

- Hipertensión arterial.
- Enfermedad del corazón.
- Diabetes.
- Cáncer.
- Derrames cerebrales.
- Bronquitis crónica y enfisema pulmonar.
- Enfermedad renal crónica.
- Arritmias cardíacas.
- Insuficiencia cardíaca crónica.
- Osteoporosis.
- Artritis y dolor de cintura crónico.

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, es propietario del inmueble ubicado en la Cra. 70 #2A-04, circunscripción del Distrito de Santiago de Cali, que se identifica con el numero predial F058500010000 ID 0000043133, en donde hace más de un (1) siglo se trabaja con adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando servicios de albergue y atención para este segmento de la población.

En el evento de condonar la deuda que el bien inmueble tiene con el distrito por impuesto predial, sería una medida idónea, que cuenta con un alto grado de probabilidad según la evidencia empírica existente, de alcanzar el objetivo invocado y se reflejaría en un apoyo real y de solidaridad con el Ancianato para alcanzar la protección integral de los adultos mayores vulnerables que requieran atención en salud y complementarios.

La medida del Distrito de condonar las deudas que por impuesto predial tiene el inmueble de



( )

**"POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

propiedad de la ESE Ancianato San Miguel es conducente y propicia para el cumplimiento de los fines estatales.

**DETERMINAR SI EL MEDIO EMPLEADO ES IMPRESCINDIBLE PARA ALCANZAR EL PROPÓSITO.**

Como se expuso en el punto anterior, el Distrito pretende apoyar a la Gobernación del Valle y el ICBF en la protección integral de los adolescentes a quienes se les ha impuesto privación de la libertad en centro especializado, a la luz de las normas consagradas en la Constitución y en el "Código de la infancia y la adolescencia", permitiendo que el inmueble donde funciona el centro especializado no tenga que pagar el impuesto predial. Se pretende a través de estas decisiones, que esta entidad pueda alcanzar los objetivos propuestos por la Constitución sobre la defensa de los NNA.

Igual argumento se predica respecto del inmueble de propiedad de la E.S.E Ancianato San Miguel, por la labor que desempeña en búsqueda de la atención a las personas de la tercera edad que se encuentren en debilidad manifiesta.

Bajo esta idea, la condonación de esas deudas, es necesaria y resulta ser la única medida mediante la cual el Distrito - apoye a la Gobernación y el ICBF y la ESE Ancianato San Miguel. Por lo tanto, es una medida imprescindible para alcanzar el propósito, no existiendo medidas alternativas que sean menos lesivos para el Distrito.

Además, reiterando lo sostenido previamente, el Hospital E.S.E Ancianato San Miguel atraviesa una situación financiera que, de extenderse en el tiempo, podría poner en riesgo la prestación del servicio a cargo de dicha E.S.E, razón para sostener que la medida a adoptar resulta imprescindible.

**LA MEDIDA ES EstrictAMENTE PROPORCIONADA.**

La condonación de las deudas causada por Impuesto Predial correspondiente a los inmuebles identificados con el No predial Z000302580000 ID0000004631, propiedad de la Gobernación del Valle del Cauca y predio No. F058500010000 ID 0000043133 de la E.S.E Ancianato San Miguel, así como lo adeudado por Contribución de Valoración de éste último, es proporcionada, toda vez que, si bien es cierto son recursos públicos de propiedad del Distrito que corresponden a ingresos corrientes de libre destinación que deberán ser destinados a gastos de funcionamiento e inversión, si los mismos no se cobran a la Gobernación, y a la ESE Ancianato San Miguel, ello se traduce en un apoyo para cumplir un deber constitucional superior como es la protección de los menores de edad, contenida en el artículo 44 y 45 Constitucional, y a las personas de la tercera edad (artículo 46 Superior). Por tanto, están en conflicto los derechos presupuestales del Distrito frente a los derechos constitucionales de los menores que requieren una infraestructura especial para cumplir la



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

privación de la libertad, cuando a ello haya lugar, respetando la primacía de sus derechos fundamentales, los cuales, han sido analizados por la Corte Constitucional en distintas providencias, donde se analiza el alcance de los derechos del menor, el cual es de interés superior del menor, caracterizado, entre otros por un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; consistente en la búsqueda del desarrollo integral y sano de la personalidad del menor.

Igual consideración se plantea respecto de las personas de la tercera edad que requieren de apoyo especial del estado para contar con la protección de la seguridad social, atención en salud, calidad de vida, alimentación, ropa, vivienda, etc, derechos integrados en la norma constitucional contenida en el artículo 46 Superior.

## 7. NO SE REQUIERE SUSTITUCION DE RENTAS

Los valores a condonar corresponden a recursos que forman parte de la cartera por concepto de tributos, que no se encuentran presupuestados por cuanto se trata de bienes de la Gobernación del Valle y de una fundación sin ánimo de lucro, predios que gozan del beneficio de exoneración otorgado en el artículo 51 literales F) y G) del Decreto extraordinario 411.2.010.20.0416 del 2021 “Por el cual se compilan el Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015 y los 0434 de 2017, 0452 de 2018, 0469 de 2019, 0473 de 2020 y el 0493 de 2020, que conforman el estatuto tributario de Santiago de Cali, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios”.

Por la razón anterior es que dichos valores no son de aquellos que deben compensarse y la única razón por la cual se encuentran en mora la Gobernación del Valle por las vigencias 2014 al 2022, por el inmueble número Z000302580000 ID0000004631, y el Ancianato San Miguel por el inmueble número F058500010000 ID 0000043133 vigencias 2016 al 2022, es porque en el Decreto municipal 411.0.20.0489 de 2013 "Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para solicitar los beneficios de exoneración y exclusión o no sujeción del impuesto predial unificado de conformidad con los acuerdos municipales 321 de 2011 y 338 de 2012" exige que las entidades para hacer uso de estos beneficios deben encontrarse al día por las vigencias anteriores. A partir de la condonación de las deudas de vigencias anterior pueden solicitar la exoneración cuando el concejo otorgue nuevas exoneraciones.

Adicional a lo anterior los valores correspondientes a las deudas de cartera por concepto de tributos, el distrito tiene una clasificación denominada de difícil cobro dada la restricción en la capacidad de pago de unas entidades dentro de las cuales se encuentra La Gobernación y el Ancianato San Miguel, por lo cual estas obligaciones no se tiene en cuenta dentro de la cartera recuperable para el cálculo de la prospectiva del impuesto predial, es decir, estas obligaciones no hacen parte de los ingresos que apalancan los gasto de Santiago de Cali. En el manejo de la cartera en el marco de responsabilidad fiscal se incluyen aquellas deudas



( )

"POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

que dentro del análisis históricos son recuperables con las diferentes gestiones que adelanta la administración, pues es deber de toda entidad territorial contar con un marco fiscal responsable.

## 8. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

Se tiene entonces la necesidad, inicial, de especificar el marco de competencias constitucionales en los siguientes términos:

El artículo 315 de la Constitución Política consagra las atribuciones dadas a los Alcaldes, encontrándose entre estas las descrita en el numeral 5: *"Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio"*.

A su vez, en el numeral 4 del artículo 313 *ibídem* el constituyente primario estableció como función de los Concejos, entre otras tantas, la de *"Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales"*.

Asimismo, constituye fundamento jurídico de la iniciativa:

El deber constitucionalmente impuesto al Distrito en las siguientes normas superiores: Artículos 44, 45, 46 que establecen la obligación del estado de proteger en forma integral a los niños, niñas y adolescentes, así como a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, obligándolos a promover su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

El artículo 113 Constitucional consagra la colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado, para la realización de sus fines.

Ley 1098 de 2006 que contiene el Código de la Infancia y la Adolescencia constituye un conjunto de normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

Igualmente en la misma Ley 1098 de 2006, en su artículo 139 creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer la conducta punible y en el





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

De 2022

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

numeral 4 del artículo 202 dispone como uno de los objetivos de las políticas públicas para la infancia y la adolescencia fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial.

El artículo 201 de la Ley 1450 de 2011, contempló que en desarrollo del principio de corresponsabilidad y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno Nacional, con el concurso de los gobiernos territoriales, dará prioridad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), iniciando la construcción de Centros de Atención Especializada (CAES) e internamiento preventivo de acuerdo con criterios de demanda del SRPA, de cobertura regional y de cofinanciación de las entidades territoriales.

El Concejo de Santiago de Cali es competente para adoptar esa medida, en atención a lo dispuesto en el artículo 287 Constitucional que otorga autonomía a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses.

**C-060/18**, en la que la Corte Constitucional hace un análisis de las amnistías tributarias, indicando cuando ellas son permitidas. Dice la Corte: “En conclusión, las amnistías tributarias resultan *prima facie* inconstitucionales, en tanto son contrarias al deber constitucional de tributar y a los principios de equidad y justicia tributaria. No obstante, las mismas pueden ser excepcionalmente compatibles con la Carta Política, cuando superen un juicio estricto de proporcionalidad, en el que se demuestre que (i) la medida legislativa es imprescindible para cumplir con fines constitucionales imperiosos; o (ii) los efectos de la amnistía tributaria resulten neutros en relación con el tratamiento fiscal que reciben los contribuyentes cumplidos.

**“CONDICIONES DE CONSTITUCIONALIDAD DE AMNISTIAS TRIBUTARIAS-Elementos principales de la doctrina elaborada por la Corte Constitucional.**

*“(…) (iv) De ahí que resulten inadmisibles las amnistías generalizadas y desprovistas de una justificación suficiente. Corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la medida, para lo cual ha empleado el test de razonabilidad o principio de proporcionalidad. (v) (...) (vi) Por el contrario, ha encontrado ajustadas a la Constitución aquellas medidas que: a. responden a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis (C-260 de 1993); b. alivian la situación de los deudores morosos sin que ello implique un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos (C-823 de 2004); c. facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiendo a un régimen más gravoso del que habría correspondido en caso de haber sido declarados oportunamente y sin renunciar a la aplicación de sanciones (C-910 de 2004). (vii) (...)”.*



( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

#### 9. COHERENCIA CON LO SEÑADO EN LA PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO.

El propósito de esta iniciativa se encuentra alineada al Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”, adoptado mediante Acuerdo 477 de 2020, considerando que es una estrategia que contribuye a la reactivación económica y fortalecimiento de instituciones como la Gobernación del Valle, permitiendo que a través suyo se apoye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para cumplir un deber constitucional superior como es la protección de los menores de edad, contenida en el artículo 44 y 45 Constitucional.

De la misma manera, permite el apoyo a la institución Ese Ancianato San Miguel, para cumplir un deber constitucional superior a las personas de la tercera edad (artículo 46 Superior).

El proyecto de acuerdo contribuye al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023, alineándose a su estructura, en la línea estratégica 202 de “Personas mayores en modalidad Centros Vida atendidas”, programa “Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar, línea estratégica 201 “Distrito Reconciliado” programa: “Programa: Fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia y Penitenciarios” a partir de la cual se preñer transformar la relación entre las nuevas ciudadanías y la acción estatal, promoviendo una estrategia colaborativa y participativa que conlleve el empoderamiento ciudadano, a la cualificación de los agentes institucionales gubernamentales y al fortalecimiento de la gobernanza.

El presente proyecto de acuerdo cuenta con los conceptos de viabilidad del Departamento Administrativo de Planeación mediante Orfeo No. 202241320400023024, del Departamento Administrativo de Hacienda expedido mediante Orfeo No. 202241320400023024 y del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública mediante rad. 202241210100044104

Todo lo anterior nos permite concluir que el proyecto de acuerdo tiene la viabilidad requerida para ser presentado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el cual establece que los proyectos de acuerdo municipales o distritales, deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan, con lo cual se cumplen los presupuestos normativos para que sea tramitado y aprobado en beneficio de la ciudad.

De los Honorables concejales,



**JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**  
Alcalde Distrito de Santiago de Cali



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

De 2022

( )

“POR EL CUAL SE CONDONAN DEUDAS TRIBUTARIAS A UN PREDIO PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y UN PREDIO, PROPIEDAD DEL HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Elmy Cecilia Giraldo - Asesora Jurídica contratista Departamento Administrativo de Hacienda. *Elmy C.*

Revisó:

Santiago Hung Duque – Director Departamento Administrativo de Hacienda. *S.H.D.*

María del Pilar Cano Sterling – Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. *M.P.C.S.*

Nhora Yhanet Mondragón Ortiz- Secretaria de Gobierno. *N.Y.M.O.*